

De triunfos y derrotas: narrativas críticas para el Chile actual

Faride Zerán (editora)

Claudio Alvarado Lincopi

Jorge Arrate

Fernando Atria

Manuel Canales

Diamela Eltit

Pierina Ferretti

Manuel Antonio Garretón

Rodrigo Karmy

Elisa Loncon

Karina Nohales

Nelly Richard

Bárbara Sepúlveda

Faride Zerán

Política

CIENCIAS
SOCIALES Y
HUMANAS



Interrogantes sobre la continuidad o interrupción de un proceso transformador¹

MANUEL ANTONIO GARRETÓN²

Si se piensa la sociedad latinoamericana como conjunto o tipo ideal, cosa no exenta de complejidades, podría reconocerse una problemática compartida que tiene esencialmente tres rasgos. Por un lado, una dimensión social que se resume en la demanda por igualdad. Por otro lado se observa una crisis profunda de las instituciones políticas y representativas, como también una crisis de la propia comunidad política, con un conjunto de politicidades que no encuentran expresión cuando los instrumentos clásicos de canalización en la región, entiéndase el Estado y los partidos políticos, se hallan en esta situación de crisis. Finalmente está la pregunta sobre los modos de inserción en un mundo globalizado, con tensiones respecto al modelo de desarrollo no solo en su versión neoliberal, sino también neodesarrollista.

Ante tal panorama pueden surgir coyunturas críticas que abran espacios a procesos refundacionales que recompongan las relaciones entre Estado y sociedad. En perspectiva comparada con la región, el caso chileno tardó en plantear o iniciar un proceso de este tipo. El retraso en buscar reconstruir la comunidad política, enfrentar deci-

1 Este artículo utiliza materiales de diversas exposiciones y documentos preparados por el autor para el Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social (Lacos) del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Contó con la edición y aportes de Fabiana Ivankovic.

2 Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007. Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Profesor titular de la Universidad de Chile. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Oxford, Notre Dame, California en San Diego y Chicago, por nombrar algunas. Autor de cerca de 60 libros entre autoría, coautoría, ediciones y compilaciones, así como de alrededor de 350 artículos en revistas y libros traducidos a varios idiomas.

didamente la desigualdad y superar el modelo neoliberal heredado de la dictadura y corregido en democracia tiene entre sus efectos la ruptura entre el mundo político-institucional y el mundo social. La falta de instancias representativas capaces de canalizar las demandas ciudadanas en el marco de una institucionalidad política regida por un principio contramayoritario y de mantención del *statu quo* lleva a una crisis de legitimidad del sistema y a un auge de movilizaciones sociales que decantan en el estallido social de 2019. Este fenómeno puede ser leído como rechazo a lo existente, pero también como posibilidad de inicio de un proceso transformador cuyos ejes son la superación de un modelo socioeconómico caracterizado como neoliberalismo contenido y la reconstitución de las relaciones entre política y sociedad.

Tres cauces o instrumentos se alineaban con un proceso de transformación como el señalado: las movilizaciones sociales, el gobierno de Gabriel Boric y el proceso constituyente. Este último no solo fue la salida institucional frente a la crisis de 2019, sino que fue un eje sobre el que giró la política y la sociedad en los últimos dos años y el eje del proceso transformador en general. En el imaginario se pensaba que la ciudadanía ratificaría la propuesta de nueva Constitución que saldría de ello, pensando que correspondía a la misma ciudadanía que había mostrado un amplio apoyo al cambio constitucional tanto en los sondeos de opinión pública como en el mismo plebiscito de entrada; o que sería la misma ciudadanía que en octubre de 2019 mostraba respaldo a las movilizaciones. No obstante, una cosa es el imaginario y otra cosa la realidad.

La propuesta de nueva Constitución fue rechazada de forma contundente en el plebiscito de salida. En efecto, con una participación del 85% del padrón electoral, la opción Rechazo se impuso con el 61,97% de las preferencias, en contraste con el Apruebo, que solo obtuvo un 38,03%. Es más, la primera alternativa venció en todas las regiones y ciudades del país, a excepción de ocho comunas. Lo mismo ocurre considerando el género, el nivel socioeconómico o la edad, sin haber diferencias significativas entre los subgrupos de estas dimensiones. Ahora bien, no deja de ser significativo que en los sectores rurales y de más bajos ingresos, como en territorios con mayor presencia de población indígena, el Apruebo fue mayormente

derrotado, con diferencias superiores a cuarenta puntos. Finalmente la preferencia por esta opción supone un 1% más de lo obtenido por Salvador Allende en las presidenciales o 300 mil votos más de lo conseguido por Gabriel Boric. Aunque esta comparación es netamente porcentual, permite aventurar que la opción por aprobar la nueva Constitución convocó únicamente al nicho de izquierda.

No existen precedentes a nivel mundial de un proceso constituyente democrático que, desarrollado por una asamblea electa en su totalidad por la ciudadanía, haya fracasado con tal magnitud. Desde una perspectiva regional, todos los procesos de cambio constitucional tras el retorno a la democracia y encauzados mediante asambleas constituyentes dieron lugar a nuevas Constituciones (aunque no todos incorporaron referéndums ratificatorios). En ese sentido el caso chileno es verdaderamente una excepción y ello exige un análisis profundo en torno a las causas que llevaron a tal escenario.

Por cierto se han puntualizado como factores un voto de sanción a la Convención y sus integrantes, como también al propio Gobierno. Así se ha apuntado a ciertos contenidos de la propuesta de nueva Constitución, como, por ejemplo, la plurinacionalidad, la tenencia de la vivienda o la propiedad y heredabilidad de las pensiones (donde los retiros de fondos pueden haber jugado un rol importante). También se ha señalado la predominancia de una «política identitaria» por sobre una agenda redistributiva o material destinada a resolver demandas de vida cotidiana y, por cierto, a los efectos del voto obligatorio en un contexto de fuertes sentimientos anti y apolíticos. Asimismo destaca la campaña de desinformación y oposición al proceso de aquellos sectores que nunca fueron favorables a una nueva Carta Magna, particularmente la derecha dura y el gran empresariado, cuyo control de medios de comunicación jugó un papel crucial. Estos sectores, en su plano político, cedieron visibilidad y espacio a una centroizquierda por el Rechazo, lo que permitió desderezar tal opción y convocar a aquel electorado favorable a una nueva Constitución, pero contrario a la propuesta de la Convención.

Así es posible evidenciar una suerte de listado de las múltiples causas que llevaron al fracaso del proceso constituyente. Tal listado no solo debe ser debatido e investigado, sino que también integrar más contenidos que los expuestos anteriormente. En cualquier caso,

tras una derrota de tal magnitud del proceso de cambio constitucional hay también un fracaso. Aquello lleva a una pregunta central, a saber, si el resultado del referéndum ratificatorio implica el fracaso de las categorías con las que se pensó el proceso constituyente e, incluso, el estallido social que lo hizo surgir.

Es posible pensar que en el estallido hubo un sector movilizado desde una búsqueda de superación al modelo neoliberal con su desigualdad económica, la dificultad extenuante para gestionar la vida cotidiana y el acceso limitado y socialmente segregado a los servicios sociales. La cuestión es si ese sector, altamente visible y masivo en 2019, podía ser comprendido como expresivo de toda una ciudadanía en aquel entonces y ahora. Si acaso much@s de los/las movilizad@s que mostraban hastío o rechazo con el *statu quo*, político y socioeconómico, no necesariamente adherían a un discurso propiamente antineoliberal o de transformación profunda. Sobre todo cabe pensar qué ocurría con aquellos sectores que no se habían manifestado y que tampoco participaron en los procesos electorarios posteriores. Pero la existencia de tales sectores, por importante que fuera, ¿niega el carácter transformador de este proceso? ¿La única lectura posible es que estábamos frente a un fenómeno de pulsiones, demandas individuales o identitarias, malestar y rechazo y no un proceso más profundo de demanda de cambio social? A nuestro juicio, esta demanda sigue vigente en la medida en que sus componentes señalados (modelo socioeconómico agotado y crisis de la comunidad política) siguen presentes y se evidencian día a día.

Así, respecto de la continuidad o no de un proceso transformador en Chile cabe examinar el impacto del resultado del plebiscito del 4 de septiembre en lo que llamamos los tres cauces de este proceso: el cambio constitucional, el gobierno del presidente Gabriel Boric y la movilización social.

El nuevo proceso constituyente abierto por el denominado Acuerdo por Chile suscrito por las fuerzas políticas reiniciaba la posibilidad de una nueva Constitución, pero con límites establecidos a través de diversas instancias (Comisión Experta a cargo de preparar un anteproyecto de Constitución a ser discutido por el Consejo Constitucional y el Comité Técnico de Admisibilidad, ambos nombrados por las dos ramas del Congreso) y con un Consejo Constitucional de

cincuenta personas elegidas de acuerdo al sistema de elección del Senado. Tales límites, además de la insuficiencia de la participación ciudadana, fueron impuestos por el bloque vencedor en el plebiscito del 4 de septiembre. Si bien pareciera que existirá una nueva Constitución (que será votada en un plebiscito de salida), está aún en disputa su capacidad de convertirse en un marco para un proceso democrático transformador.

En cuanto al gobierno de Gabriel Boric, sin duda que ha mostrado su voluntad de seguir adelante con un proceso transformador, especialmente a través de una reforma tributaria, de pensiones, de sistema de salud, de legislación laboral, de cuestiones vinculadas al modelo de desarrollo. Sin embargo es evidente que este impulso ha sido mermado por el resultado del plebiscito, el endurecimiento de la derecha y la existencia de un bloque opositor con capacidad de veto en casi todos los planos, así como el clima de opinión pública acuciado por la inflación y los problemas de seguridad (reconociendo la capacidad de respuesta que ha tenido el Gobierno) y los problemas, en parte provenientes de las tensiones en su coalición, de reconstitución de un relato y una propuesta con un horizonte en que converjan y no solo se sumen tanto las respuestas a las cuestiones de vida cotidiana como a las transformaciones estructurales y de largo plazo.

Respecto de la capacidad de movilización de sectores sociales en torno a un horizonte de transformación y no solo de demandas inmediatas, estamos en una situación muy diferente a la existente en los últimos años debido a muchos de los fenómenos ya mencionados, principalmente el desencanto respecto de las posibilidades de cambio y respuesta de las élites políticas. Incluso algunos sectores que han mostrado cierta capacidad de movilización parecieran expresar más bien malestar por sus propias condiciones y demandas que adhesión a algún proyecto que los ligue con otros. Pero ello no significa una situación cerrada a esta última posibilidad y dependerá de lo que puedan hacer las fuerzas políticas para restablecer su relación con ellos.

¿Cuáles son los escenarios abiertos respecto del proceso de transformación en el sentido que hemos planteado en estas reflexiones?

El primero de ellos es una restauración conservadora que ya ha tenido elementos de instalación. Lo anterior supondría la conversión de la derrota de una propuesta constitucional en la derrota del

proyecto transformador en sí, esto es, implicaría el aprovechamiento de la coyuntura actual para impulsar un nuevo proyecto –fundamentado en una nueva coalición político-social– articulado en torno a la afirmación de los aspectos centrales del *statu quo*. Es posible afirmar que actualmente esta es la estrategia de la derecha, sector que logró pasar de ser un núcleo minoritario a arrogarse la mayoría obtenida por el rechazo a la nueva Constitución. Si bien tal votación no puede comprenderse como un triunfo de este (o de ningún) sector político y su programa, en la práctica tal interpretación ilustra una pretensión de impedir todo atisbo de transformación sustantiva. Lo que se presenta es una oposición más obstruccionista, fortalecida y agresiva que, en búsqueda de restauración, califica el estallido social como acontecimiento netamente violento o delictual, negando los factores estructurales que llevaron a tal crisis y al proceso constituyente.

Un segundo escenario es lo que podríamos llamar el empantanamiento. Este implica el fin del proceso transformador como eje orientador, aunque no a partir de una restauración conservadora. En concreto implica que el país pasa de vivir un *proceso* – es decir, un fenómeno surgido desde una coyuntura crítica o conflicto que define un sentido encarnado por actores precisos– a experimentar *situaciones* marcadas por políticas reformistas o contrarreformistas, encabezadas por el gobierno de turno y/o por movilizaciones sociales ocasionales en un tono de hastío, pero desencantado. Con ello Chile se asemejaría a la actualidad latinoamericana, donde no existe una problemática central, sino problemas a los que deben dar respuesta los gobernantes. Al persistir la crisis social y política estos últimos experimentan un fuerte rechazo, de tal forma que en las elecciones siguientes son electos actores de signo político distinto, los que rápidamente sufren del mismo hastío.

Es importante explicitar que el escenario de empantanamiento y sobre todo el de restauración conservadora implicarían un término en el ciclo abierto en 2011 y profundizado en 2019.

El tercer escenario, entonces, es la continuidad de un proceso transformador, pero cuyos componentes se encuentran debilitados. En efecto, como hemos señalado, salvo en el caso de los(as) estudiantes secundarios(as), se desconocen las posibilidades y potencialidades reales de nuevas formas de movilización social. Desde

otra perspectiva, el Gobierno no tiene mayorías institucionales para impulsar su programa, y además está golpeado tras el plebiscito. A su vez, aunque la mayoría de las fuerzas políticas declara estar a favor de un proceso de cambio constitucional, las características del nuevo mecanismo constituyente son todavía inciertas. Finalmente no pareciera registrarse un proyecto transformador claro, diferente y viable que involucre a una coalición político-social sólida. Tanto la distancia entre política y sociedad como la recomposición en el campo político dificultan lo anterior.

Pero la insatisfacción, el malestar o el agobio de la ciudadanía reflejados en 2019 no han desaparecido. Incluso puede considerarse que han aumentado tras más de dos años de pandemia, un proceso constituyente fallido, una crisis económica a profundizarse en los meses siguientes y un encarecimiento sustancial del costo de la vida. Inflación, cesantía y delincuencia encabezan las preocupaciones ciudadanas, a las que se suman la falta de reformas sustantivas en materia de pensiones, educación, salud y vivienda.

Vivimos una situación extremadamente compleja, cuyos derroteros son inciertos. Los escenarios de restauración o de empantanamiento no solo no resuelven la crisis que dio origen a un proceso transformador, sino que la agravan y amenazan con la destrucción de la sociedad como comunidad política. La pregunta fundamental es, entonces, cómo se retoma un proyecto transformador en las actuales circunstancias sin caer en los errores en que cayeron las diversas fuerzas transformadoras, con un Gobierno que tiene en su horizonte la vocación transformadora pero que no se ha convertido en mayoría estable.